

1. ¿Cuál de los siguientes derechos puede ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?

- a) El derecho de huelga
- b) El derecho de libertad ideológica
- c) El derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales
- d) El derecho al honor.

2 - Respecto de las reformas constitucionales llevadas a cabo, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) No se han realizado reformas constitucionales.
- b) Se han realizado dos reformas constitucionales, una sobre el artículo 13.2 para adaptar el texto al Tratado de Maastricht y una segunda sobre el artículo 135 con la finalidad de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria.
- c) Se han realizado tres reformas constitucionales, una sobre el artículo 13.2 para adaptar el texto al Tratado de Maastricht y las dos restantes sobre el artículo 135, vinculando a todas las Administraciones con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria frente a la UE.
- d) Se han realizado dos reformas constitucionales, una sobre el artículo 13.2 para adaptar el texto al Tratado de Maastricht y una segunda sobre el artículo 68 con la finalidad de modificar el régimen electoral.

3. Según el texto actual de la Constitución española de 1978, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación:

- a) En ningún caso.
- b) Mediante ley ordinaria.
- c) Mediante ley orgánica.
- d) Solamente cuando así lo exija el interés general, correspondiendo a las Cortes Generales por mayoría de tres quintos de cada Cámara, la apreciación de la necesidad.

4. Señala la respuesta incorrecta en relación con el ejercicio de competencias por las entidades locales:

- a) Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación.
- b) Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
- c) Las competencias atribuidas se ejercen en los términos de la delegación y bajo la propia responsabilidad, pudiéndose prever técnicas de dirección que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local.
- d) Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán

necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

5. A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuál no es un criterio general de actuación de los Poderes Públicos:

a) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.

b) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

c) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

d) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

6. Señale la respuesta correcta en relación con el cupo a reservar para ser cubiertas entre personas con discapacidad:

a). En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.

b). Las convocatorias de pruebas selectivas para acceso por promoción interna deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.

c). En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.

d). Todas las respuestas son correctas.

7. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son:

a) La oposición y el concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

b) La Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.

c) La libre designación con convocatoria pública consistente en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

d) Todos son sistemas de acceso al empleo público.

8.- El órgano competente para aprobar el inventario municipal, así como su rectificación y comprobación, es:

- a) El Alcalde Presidente.
- b) El Pleno de la Corporación por acuerdo la mayoría cualificada del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- c) El Concejal de Hacienda y Patrimonio.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

9. ¿Cuál de las siguientes actuaciones de un funcionario en el ejercicio de su cargo constituye falta muy grave?

- a) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
- b) La incorrección con los superiores.
- c) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- d) La falta de asistencia injustificada de dos días.

10.- Cuando se articula un sistema de progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo se trata de:

- a) Carrera horizontal
- b) Carrera vertical
- c) Promoción interna vertical
- d) Promoción interna horizontal

11. Señala la respuesta incorrecta en relación con el nombramiento accidental de un puesto reservado a funcionario de habilitación nacional:

- a) Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos en Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, las Corporaciones Locales podrán solicitar a las Comunidades Autónomas el nombramiento, con carácter accidental, de uno de sus funcionarios con la preparación técnica adecuada y, siempre que sea posible, que pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. En las Corporaciones Locales de más de 5.000 habitantes, en todo caso, será un funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1.
- b) Para que se pueda efectuar un nombramiento accidental, el puesto deberá estar vacante, o no encontrarse desempeñado efectivamente por su titular, por encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes: Comisión de servicios, suspensión por un periodo superior a un mes, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por violencia de género, incapacidad temporal por periodo superior a un mes, u otros supuestos de ausencia, siempre que sea superior a un mes.
- c) Podrá ser habilitado accidentalmente un funcionario interino para desempeñar un puesto reservado a funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, siempre que no exista posibilidad de nombrar a un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional para dicho puesto.
- d) Para los supuestos de incapacidad temporal por periodos de tiempo inferiores a un mes, o

ausencia del titular del puesto por vacaciones, asuntos propios u otras causas, por periodos inferiores a un mes, se podrá nombrar accidentalmente, a propuesta del Presidente de la Corporación a un funcionario propio de la Entidad Local, de acuerdo con la normativa autonómica.

12. El gobierno y administración municipal corresponde.

- a).- Al ayuntamiento integrado por el Alcalde y los concejales
- b).- Al alcalde con la supervisión de la junta de gobierno local
- c).- A la junta de gobierno local en los municipios de más de 5.000 habitantes
- d).- A los órganos que se establezcan en el reglamento orgánico municipal

13. La aprobación de la Oferta de empleo público corresponde:

- a).- Al alcalde pudiendo delegarse en la junta de gobierno local.
- b).- Al alcalde sin posibilidad de delegación
- c).- Al pleno del ayuntamiento.
- d).- A la junta de gobierno local

14. Según la ley 7/85 reguladora de las bases de régimen local la población del municipio está constituida por:

- a).- El conjunto de personas inscritas en el padrón municipal.
- b).- Por todos los que residen en un municipio aunque sólo sea un periodo de tiempo al año.
- c).- Las dos anteriores son correctas.
- d).- Por todas aquellas personas que están inscritas en el censo electoral

15. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal:

- a).- Corresponde al ayuntamiento de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
- b).- Corresponde a las diputaciones provinciales.
- c).- Corresponde al Instituto Nacional de estadística.
- d).- Corresponde al consejo de empadronamiento

16. La aprobación del reglamento orgánico municipal corresponde:

- a).- Al pleno de la corporación por mayoría simple de votos
- b).- A la junta de gobierno local
- c).- Al pleno de la corporación por mayoría absoluta
- d).- A la junta de gobierno local sólo si tiene esta competencia delegada

17. El servicio de biblioteca pública deberá prestarse en todo caso:

- a).- En municipios de más de 5.000 habitantes
- b).- en todos los municipios.
- c).- En los municipios de más de 20.000 habitantes.
- d).- Ninguna de las anteriores es correcta.

18. Las sesiones ordinarias del pleno han de convocarse:

- a).- Con al menos 2 días hábiles de antelación
- b).- Con al menos 48 horas de antelación
- c).- Con al menos 72 horas de antelación
- d).- Con al menos 2 días naturales de antelación

19. Las entidades locales:

- a).- Carecen de potestad sancionadora
- b).- Pueden tipificar infracciones y sanciones en sus ordenanzas
- c).- Tienen potestad sancionadora
- d).- Son correctas la b) y la c)

20. Según el principio de irretroactividad en los procedimientos sancionadores:

- a).- Las disposiciones sancionadoras nunca tendrán carácter retroactivo.
- b).- Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyen infracción administrativa.
- c).- Las disposiciones sancionadoras podrán ser retroactivas cuando favorezcan al presunto responsable.
- d).- Son correctas la b) y la c).

21. El recurso contencioso-administrativo se puede interponer:

- a).- contra disposiciones de carácter general
- b).- Contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa siempre que estos sean definitivos.
- c).- Contra actos de trámite siempre que éstos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- d).- Todas son correctas.

22. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo contra un acto expreso o una disposición de carácter general será:

- a).- De 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto administrativo.
- b).- De 2 meses contados desde el mismo día de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación o publicación del acto administrativo.
- c).- De 3 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto administrativo.
- d).- De 3 meses contados desde el mismo día de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación o publicación del acto administrativo.

– **23.- El art. 1 de la LCSP relaciona una serie de principios que la citada ley pretende garantizar. Detecta la respuesta que contempla alguno de los principios que no menciona este artículo.**

- a) Publicidad, transparencia y funcionamiento electrónico.
- b) Libertad de acceso a las licitaciones.
- c) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores
- d) Integridad, eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios.

– **24.- Señala la respuesta correcta:**

- a) En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.
- b) En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios

sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

c) Se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

d) La b y la c son correctas.

– **25.- Indica la respuesta incorrecta:**

– a) Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

– b) Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley.

c) De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia establecidos en este artículo, las entidades del sector público podrán, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, celebrar contratos derivados de proyectos promovidos por la iniciativa privada, en particular con respecto a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, incluidos en su modalidad de sociedad de economía mixta.

d) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. Además, en el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra por encima de la cual un contrato ya no tiene la consideración de menor. Si bien, no será necesaria la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato cuando el importe del contrato sea inferior a 2.500.-€.

– **26.- Señala la respuesta que contiene un supuesto que no está entre los que contempla la LCSP como contratos celebrados por poderes adjudicadores que incurren en nulidad de pleno derecho:**

– a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71. Así como la

– b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia.

– c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.

d) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.

– **27.- Identifica la respuesta incorrecta:**

- a) El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- b) En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado.
- c) En el precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- d) En los contratos de obras, suministros y servicios, el valor estimado de los contratos comprenderá el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

– **28.- Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:**

- a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP así como la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
- b) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP.
- c) La ejecución de una obra o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP así como la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

– **29.- Señala la respuesta correcta:**

- a) La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones propias del contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- b) El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- c) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles y contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
- d) Todas las respuestas son correctas.

30- Identifica la afirmación errónea.

- a) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- b) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
- c) En la solicitud que realicen los interesados será necesario especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.
- d) En el marco de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

31.- Indica la afirmación correcta:

- a) Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 222 de la LOTUP, la instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público.
- b) Están sujetas a licencia la primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.
- c) Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras necesarios para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad, seguridad, funcionalidad o uso efectivo que permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino que les sea propio.
- d) La a y la c son correctas.

32.- Indica la afirmación incorrecta.

- a) La adopción de las medidas de restauración del orden urbanístico infringido es una competencia irrenunciable y de inexcusable ejercicio por la administración actuante.
- b) La instrucción del expediente sancionador y la imposición de multas permite a la administración evitar la adopción de medidas tendentes a la restauración del orden urbanístico infringido, en los términos establecidos en esta ley.
- c) Tratándose de obras de edificación, no legalizables durante el desarrollo y la ejecución urbanística del planeamiento vigente en el momento en que fue realizada la infracción

urbanística, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente.

- d) Iniciado el procedimiento, podrán adoptarse por el órgano competente para la resolución del mismo todas las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final. El acuerdo de adopción tendrá que ser motivado.

33.- Señala la afirmación correcta.

a) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

b) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente al personal empleado público correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

c) Para la exigencia de responsabilidad de autoridades y demás personal al servicio de la administración, y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

d) La a y la c son correctas.

34. Señale la afirmación correcta:

A.- La Administración pública instructora podrá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten.

B.- La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

C.- La Administración pública instructora podrá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.

D.- La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten.

35. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación". ¿Cuál de las siguientes es una excepción a esta norma?:

- A).- Terminación del procedimiento por pacto o convenio
- B).- Procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable
- C).- Procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación a la Administración
- D).- Todas son correctas

36. Según el artículo 13.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas:

- A.- El Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
- B.- Las Diputaciones Provinciales, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
- C.- El Estado y las Diputaciones Provinciales, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
- D.- La Unión Europea, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.

37. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el:

- A.- Registro Civil del municipio en el que resida habitualmente.
- B.- Registro Administrativo del municipio en el que resida habitualmente.
- C.- Padrón del municipio en el que resida habitualmente.
- D.- Registro Civil del municipio en el que haya residido los últimos tres años.

38. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas :

- A.- Contra las resoluciones, que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, y contra las disposiciones administrativas de carácter general, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

- B.- Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
- C.- Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
- D.- Contra las resoluciones, las disposiciones administrativas de carácter general y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
- **39. ¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso contencioso administrativo si se presenta contra un acto administrativo expreso?**
 - A.- Un mes
 - B.- Dos meses
 - C.- Quince días
 - D.- Tres meses
- **40. ¿Cuál de los siguientes medios no lo es de ejecución forzosa?**
 - A.- Apremio sobre el patrimonio.
 - B.- Ejecución subsidiaria.
 - C.- Multa subsidiaria.
 - D.- Compulsión sobre las personas.

41.- El contenido de los actos se ajustará:

- a) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos
- b) Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico
- c) Lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley
- d) Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de aquellos

42.- La eficacia de los actos quedará demorada cuando:

- a) Así lo exija el contenido del acto
- b) Esté supeditada a su notificación o publicación
- c) Esté supeditada a aprobación superior
- d) Todas son correctas

43.- Respecto a la anulabilidad:

- a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder
- b) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados
- c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto en cualquier caso
- d) Todas son correctas

44.- La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido:

- a) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo
- b) 1 año desde que se dictó el acto administrativo
- c) 2 años desde que se dictó el acto administrativo
- d) 4 años desde que se dictó el acto administrativo

45.- El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina:

- a) De la actividad de las Administraciones Públicas
- b) De los actos administrativos
- c) De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común
- d) De la revisión de los actos en vía administrativa

46.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad:

- a) Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la documentación que así lo acredita
- b) Que pondrá a disposición de la Administración la documentación cuando le sea requerida
- c) Que se compromete a mantener el cumplimiento de las obligaciones anteriores durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio
- d) Todas son correctas

47.- Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule:

- a) Pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior, vinculante, a la resolución que les ponga fin

- b) No pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin
- c) No pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter posterior, vinculante, a la resolución que les ponga fin
- d) Pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin

48.- Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. El órgano competente para la tramitación podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de:

- a) 5 días desde su presentación, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el interesado
- b) 10 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado
- c) 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado
- d) 10 días desde su presentación, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer el interesado

49.- La interposición de cualquier recurso:

- a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso
- b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado
- c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado
- d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso

50.- El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso será:

- a) 1 mes
- b) 2 meses
- c) 3 meses
- d) Cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

51. De acuerdo con el art. 13 de la Ley 39/2015, quienes de conformidad con el artículo 3 de esta ley, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

- a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- b) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que

- habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
- c) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
 - d) Todas son correctas.

52. De conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las concesiones administrativas sobre bienes demaniales:

- a) Tendrán una duración determinada y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
- b) Tendrán una duración determinada y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 70 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
- c) Pueden tener una duración ilimitada si así lo acuerda el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta.
- d) Su duración en ningún caso puede superar la que establezca el Alcalde Presidente mediante resolución.

53. El artículo 141 de la Constitución Española determina:

- a) Que mediante ley ordinaria de las Cortes Generales podrán suprimirse Provincias.
- b) Que la Provincia será entidad local supramunicipal si así lo preveen los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.
- c) Que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

54. La Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, establece que:

- a) El Reglamento Orgánico Municipal no será obligatorio en ningún municipio.
- b) El Reglamento Orgánico Municipal será obligatorio en los municipios de más de 5.000 habitantes.
- c) El Reglamento Orgánico Municipal será en todo caso obligatorio en los municipios de más de 20.000 habitantes.
- d) El Reglamento Orgánico Municipal será obligatorio si así lo acuerda la Junta de Gobierno Local.

55.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la alteración jurídica de los bienes integrantes de su patrimonio, establece:

- a) Que en ningún caso requiere la tramitación de expediente administrativo.
- b) Que se produce de forma automática, entre otros supuestos, por adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público.
- c) Que no se puede alterar jurídicamente la calificación de los bienes de forma automática.
- d) Que en todo caso requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Corporación, así como autorización del órgano competente de la comunidad autónoma.

56.- El órgano competente para la aprobación inicial del Presupuesto General de las Entidades Locales es:

- a) El Alcalde Presidente, en los supuestos de urgencia, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
- b) La Comisión Informativa de Hacienda, en los municipios del Título X de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local.
- c) El Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas.
- d) El Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa competente por razón de la materia.

57.- Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la adquisición de compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, determina:

- a) Que se pueda reconocer la obligación si se aprueba la correspondiente factura.
- b) Que el acto incurra en vicio de anulabilidad, pudiendo subsanarse por acuerdo del órgano competente.
- c) Que el acto se subsane si se ratifica por el Alcalde Presidente.
- d) Que el acto incurra el causa de nulidad absoluta de pleno derecho, por inexistencia de crédito adecuado y suficiente.

58. De conformidad con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, son impuestos obligatorios en todos los municipios:

- a) El impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre actividades económicas.

b) El impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

c) Únicamente es obligatorio el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

59.- Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales contra un acto de gestión tributaria de un Ayuntamiento de régimen común, el interesado puede:

a) Interponer potestativamente recurso de reposición o interponer directamente recurso contencioso administrativo.

b) Interponer recurso de reposición, previo y preceptivo a la interposición del recurso contencioso administrativo.

c) Interponer recurso de alzada, salvo si se trata de la providencia de apremio.

d) Interponer únicamente y exclusivamente recurso de alzada ante el Tesorero Municipal.

60.- Conforme el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, los acuerdos de establecimiento de tasas:

a) Requieren en todo caso de la existencia de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado de la ocupación o aprovechamiento del dominio público o la previsible cobertura del coste del servicio.

b) No requieren informes técnicos, sólo el informe jurídico del Secretario de la Corporación.

c) Los adopta el Alcalde Presidente a la vista del estudio económico.

d) Los adopta el Pleno, siempre que de los informes técnicos se desprenda que el importe de la tasa es superior al valor de mercado de la ocupación o aprovechamiento del dominio público, o superior al coste del servicio.

PLANTILLA CORRECTOR

1	A
2	B
3	C
4	C
5	B
6	C
7	A
8	D
9	C
10	A
11	C
12	A
13	A
14	A
15	A
16	C
17	A
18	A
19	D
20	D
21	D
22	A
23	A
24	D
25	D
26	D
27	C
28	A

29	D
30	A
31	D
32	B
33	D
34	B
35	D
36	A
37	C
38	B
39	B
40	C
41	A
42	D
43	B
44	D
45	C
46	D
47	D
48	C
49	B
50	A
51	D
52	A
53	C
54	C
55	B
56	D
57	D

58	A
59	B
60	A

